



RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, de la Secretaría General, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 910/2013, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso-administrativo n.º 903/2011. (2013061652)

Ha recaído sentencia firme n.º 910, de 16 de julio de 2013, por la que se resuelve el recurso contencioso-administrativo n.º 903 de 2011 promovido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a instancia de la Procuradora D.ª Antonia Muñoz García, en nombre y representación del recurrente Don Manuel Pérez Martínez, siendo parte demandada la Administración General del Estado, defendida y representada por el Abogado del Estado, y la Junta de Extremadura, defendida y representada por el Letrado de su Servicio Jurídico. El recurso se ha interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Extremadura de fecha 28 de abril de 2011, dictada en la reclamación 06/1968/09, por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, esta Secretaría General de acuerdo con la Resolución de 19 de agosto de 2011, del Consejero, sobre delegación de competencias y de firma en los titulares de la Secretaría General y de las Direcciones Generales de la Consejería,

RESUELVE:

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia n.º 910, de 16 de julio de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 903/2011, llevando a puro y debido efecto el fallo cuya parte dispositiva dice:

“Que en atención a lo expuesto debemos de estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel Pérez Martínez, contra la resolución del TEARE de 28 de abril de 2011, a que se refieren los presentes autos y en su virtud la debemos de anular y anulamos por no ser conforme a Derecho, con devolución de lo abonado por la complementaria e intereses”.

Mérida, a 1 de octubre de 2013.

La Secretaria General,
MARÍA GUARDIOLA MARTÍN